

# **El sentido común en disputa: la emergencia de las nuevas derechas y su instrumentalización de la memoria histórica en el Perú contemporáneo**

Gabriela Carrasco Aubert<sup>1</sup>

## **Resumen**

Las disputas por la memoria en el Perú contemporáneo, tras más de 20 años de finalizado el conflicto armado interno (CAI), han visto recientemente un viraje en sus usos. En un contexto sociopolítico complejo, de tejido social fragmentado, heridas aún abiertas, atravesadas por la clase y la raza, instituciones débiles y estigma ideológico contra las izquierdas como rezago del CAI, el reciente ascenso de un gobierno de izquierda en las últimas elecciones presidenciales, encabezado por un profesor rural, agricultor, representación de quien históricamente no podría haber sido concebido como líder de un estado-nación criollo como el Perú, ha permitido, a las nuevas derechas, el despliegue reaccionario de mecanismos organizativos y discursivos ante la amenaza de su “estatus democrático” en el país, siendo subestimados por ciertos grupos de la oposición, impidiendo analizar en su complejidad sus despliegues ideológicos y políticos como actores activos en la construcción de sus sentidos comunes y por ende, en las definiciones de sus ciudadanías, sirviéndose de la instrumentalización de herramientas oficiales de memoria histórica como el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) para la construcción de una posverdad negacionista que solidifica, cada vez más, sus sentidos comunes, sus discursos y retóricas violentas.

---

<sup>1</sup> Bachiller en psicología, investigadora en formación. Universidad Andina del Cusco. -

[gabrielacarrascoaubert@gmail.com](mailto:gabrielacarrascoaubert@gmail.com)

**El sentido común en disputa: la emergencia de las nuevas derechas y  
su instrumentalización de la memoria histórica en el Perú  
contemporáneo**

*Those at the top say: peace  
and war  
Are of different substance.  
But their peace and their war  
Are like wind and storm.*

*Those at the top say:  
This way to glory.  
Those down below say:  
This way to the grave.*

Bertolt Brecht, 1955

El 2021 fue un año complejo para la historia de la sociedad peruana. Durante la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19, se cumpliría, el 28 de julio, el Bicentenario de la República del Perú junto a la ascensión del nuevo presidente de la República, el profesor de escuela rural, Pedro Castillo, de una manera bastante simbólica para lo que ha significado la configuración del Estado-Nación peruano y sus implicancias en la trama histórico-social que se perciben con fuerza en el Perú contemporáneo.

El Perú, un país que se encuentra aún en etapa posconflicto armado interno (desde ahora CAI), con el tejido social fragmentado y heridas abiertas atravesadas por las violencias de clase, raza y los estigmas sociales derivados del CAI contra las organizaciones sociales de izquierda, sindicales, defensoras de los derechos humanos y críticas del *establishment*, vio su escenario electoral polarizado. En medio de una crisis marcada de representación, de las instituciones y la decadencia de la democracia liberal visibilizada en los últimos gobiernos teñidos de escándalos políticos (en los últimos 30 años, 7 ex presidentes han sido acusados de corrupción, entre otros procesos judiciales, investigaciones y condenas,

desde el periodo autocrático de Alberto Fujimori hasta el efímero gobierno de Manuel Merino), las brechas crecientes entre las clases sociales del país, pusieron en cuestión el modelo neoliberal regente, instaurado en la década de los 90s durante el gobierno del ex autócrata Alberto Fujimori, reforzando en una parte de la ciudadanía, el fuerte descontento respecto a las clases políticas y sus maniqueísmos, arrastrado desde la última desestabilización del entramado político peruano, en el mes de noviembre de 2020, gracias a la vacancia del ex presidente Martín Vizcarra, la toma del mando del ex congresista Manuel Merino, considerada ilegítima por un gran porcentaje de la ciudadanía peruana, y su posterior renuncia producto del despliegue colectivo en el espacio público mediante grandes movilizaciones nacionales impulsadas por la denominada Generación del Bicentenario.

En este escenario electoral complejo, Keiko Fujimori, con el partido Fuerza Popular, encarnó el legado de Alberto Fujimori, su padre, durante las elecciones del bicentenario, siendo la figura política de las derechas neoconservadoras o *nuevas derechas* y las clases dominantes empresariales concentradas en la capital, perdiendo en segunda vuelta, por tercera vez consecutiva en tres procesos electorales distintos desde el año 2011, en esta ocasión, contra su adversario, invitado del partido de izquierda marxista-leninista-mariateguista (según el ideario del partido) y no limeña Perú Libre, el profesor de educación rural, rondero, campesino y dirigente sindical, Pedro Castillo. Ambos candidatos, diametralmente opuestos entre sí, encarnaron traumas del pasado histórico, proyectados en el otro; así, la desigualdad notoria del campo en el que ambos jugaban su disputa por el poder, se materializó en el despliegue de campañas de estigmatización, discriminación, violencia racista, clasista y terruqueo (instrumento político de las derechas conservadoras para asignar a contrincantes de izquierda alguna filiación o conducta terrorista o apologista de este) por parte de las y los simpatizantes de Keiko Fujimori y aliados de los poderes económicos, autodenominados *defensores de la democracia*, contra las y los simpatizantes de Pedro Castillo, el partido Perú Libre, y a quienes estuvieran, una vez más, en contra del ascenso del fujimorismo al poder.

El estigma contra la izquierda en imbricación con el racismo, produjo la aparición en el espacio público de los fantasmas sintomáticos intermitentes en el imaginario colectivo de una parte de la sociedad peruana, en forma de *terrorismo*, *comunismo* y *la narrativa racista del «¿cómo es posible que un cholo nos gobierne?»*. Así, con los medios hegemónicos a su favor y la alianza con las clases dominantes, la derecha

neoconservadora desplegó, de manera reaccionaria, propaganda anticomunista en los medios y en las calles de la capital y de algunas ciudades no limeñas del país, llegando a tomar el espacio público en manifestaciones dirigidas por ciudadanos de las clases medias y altas en su mayoría, y organizaciones y colectivos ciudadanos de derechas conservadoras, hispanistas y de militares retirados, concentrados en gran parte en la ciudad de Lima, en defensa de la democracia durante la segunda vuelta electoral y después de dados a conocer los resultados, apelando a la figura del fraude electoral, similar al despliegue de Donald Trump, de derecha conservadora, al perder contra Joe Biden (Mitrovic, 2021).

Sin embargo, a pesar del despliegue recursivo y discursivo social durante y después del proceso electoral, ciertos mecanismos políticos están siendo utilizados por las nuevas derechas para torcer la historia a su favor, en forma de proyectos de ley o leyes que no tienen el foco de atención público, relacionados a la memoria histórica del CAI. En ese sentido, el presente ensayo pretende analizar, desde el análisis crítico del discurso (Van Dijk, 1999), los mecanismos políticos de instrumentalización de herramientas oficiales de memoria histórica como el Informe Final de la CVR, documento de trabajo exhaustivo que reúne información minuciosa del CAI, identificando a sus principales responsables (Partido Comunista Peruano – Sendero Luminoso, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, las Fuerzas Armadas del Perú y la Policía Nacional del Perú), sus antecedentes y graves consecuencias en la sociedad peruana entre los años 80 al 2000, para la construcción y el sustento de políticas de memoria que nieguen el terrorismo de estado perpetrado por las FFAA y la PNP durante el gobierno de Fujimori y la responsabilidad del ex autócrata en los crímenes de lesa humanidad por los que se le condena, además de la defensa ulterior del modelo económico actual y la herramienta política que lo respalda: la Constitución del 93, creada en su gobierno, reforzando una narrativa de posverdad y pretendiendo instaurarse, una vez más, en el sentido común de las y los peruanos como la verdad histórica.

## **Para entender las nuevas derechas y el terruqueo en el Perú**

El terruqueo es un instrumento político que ha sido y es utilizado por las derechas más conservadoras del Perú, exacerbándose durante el CAI y la etapa posconflicto actual, para desacreditar a individuos y organizaciones de la oposición política y aquellas que trabajan

en la defensa de los derechos humanos. Llama la atención particular que el terruqueo está presente en el mismo discurso que llama a la democracia.

Es a partir de 1980, en el cono sur de América Latina, que las derechas empiezan a aparecer como abanderadas de la democracia representativa en oposición a las actitudes antidemocráticas de las derechas de principios del siglo XX y, fundamentalmente, de los años 70, cuando los regímenes políticos eran autoritarios e incluso, estaban revestidos de terrorismo de Estado. Es así que antes de que finalizara esa década, el fenómeno de las derechas abanderadas de la democracia representativa, empezaba a conceptualizarse en términos de «nuevas derechas» (Giordano, 2014).

En el Perú, poco tiempo antes del apogeo neoliberal de los 90, la democracia *instrumental* venía acompañada de la totalización del mercado, el control de los medios de comunicación y la utopía de una democracia dialogante que resultara en el conceso armónico y espontáneo entre las partes. Eran derechas, como la de Mario Vargas Llosa y Hernando de Soto (el primero perdió contra Alberto Fujimori durante las elecciones de 1990, el segundo fue parte del equipo económico de Alberto Fujimori, encargado del llamado *fujishock* o *paquetazo*, el plan económico de ajuste neoliberal, además de haber sido candidato presidencial en las elecciones del 2021), caracterizadas por la defensa de los valores del capitalismo y contra aquello que consideraban sus agentes erosionadores: el comunismo, el burocratismo, el intervencionismo del Estado y, en general, cualquier política regulatoria del mercado que afectara los intereses de clase de unas burguesías (Lauer, 1988).

Así, durante aquellos años, el aglutinante de los grupos de derecha era la defensa de la democracia instrumental como la vía más segura para la satisfacción de los intereses materiales de unas burguesías que antes fueron representadas por gobiernos autoritarios en el Estado (Hinkelammert, 1988). En el país, debido a que las derechas se han concentrado en fuerzas de gobierno, predominando notas de continuidad política como la precariedad de la institucionalidad democrática, la totalización del mercado y el control concentrado de los medios de comunicación en las últimas décadas, se han monopolizado los recursos del Estado para construir una democracia aparentemente dialoguista, en la medida que está en la naturaleza del Estado moderno ocultar su carácter de instrumento de las clases dominantes (Giordano, 2014).

En la actualidad, el aglutinante de las nuevas derechas es la necesidad de hacer frente y vencer a fuerzas políticas de izquierda y centroizquierda con diversos matices y tendencias, como se ha demostrado en el escenario político durante las elecciones generales del 2021. Que estas fuerzas políticas hayan puesto en práctica políticas públicas en favor de las mayorías antes excluidas explica por qué hoy, en el marco de su pugna por disputar el poder, las derechas ostentan como elemento «nuevo» la bandera de la inclusión, junto a una reivindicación de la democracia política que no es nueva. Al respecto, O'Donnell (1992) destaca que no es que las derechas sean hoy democráticas por convicción, a diferencia de los contextos de dictaduras de los años 70. Las burguesías latinoamericanas, que encuentran en la derecha una de sus más famosas formas de expresión política, tienen un vínculo contingente con la democracia. Hoy estamos transitando una de esas contingencias históricas en las que las derechas y la democracia vienen asociadas (O'Donnell, 1992).

En el caso del Perú, tras 20 años de CAI, durante las últimas elecciones, Keiko Fujimori con Fuerza Popular, Hernando de Soto con Avanza País, Rafael López Aliaga con Renovación Popular y algunas facciones más a la derecha de partidos políticos como Acción Popular, han generado un ensamblaje entre distintos proyectos de derechas para armar bloques de poder o campos de acción políticas más complejas y potentes, capaces de actuar de forma multidimensional según lo que exija cada situación. Un ejemplo claro es la defensa de la democracia como narrativa central en oposición a un enemigo en común: el comunismo. Consignas como “terrorismo nunca más” han resonado en el espacio público en la actualidad, dando cuenta de que, a las nuevas derechas, la identificación del “otro” les permite el uso de un lenguaje o práctica política enraizada en la noción de “guerra”, tal como ha sucedido en otros regímenes autoritarios durante la historia. La particularidad puede ser que los discursos y prácticas anti-democráticas se ejercen a través de la democracia y están enraizadas en un autoritarismo social ampliamente presente en los sectores populares de la región del cono sur latinoamericano (Giordano, 2014).

Así, las nuevas derechas son conscientes de la necesidad de construcción hegemónica, configurando estrategias complejas a fin de disputar distintos espacios de poder en la sociedad, siendo el Estado la clave. “La implementación de estrategias políticas hegemónicas se basa en una alianza de clase, entre élites que temen perder poder (ante un capitalismo de información y globalizado), una clase media que pierde seguridad, y una

clase popular precarizada, que ataca la imagen del capitalismo actual, sin atacar sus bases económicas. Vemos un nuevo populismo de derecha, con un discurso nacionalista y anti-establishment, pero financiado, implementado y hasta representado por las propias élites.” (Giordano, 2014).

La implementación de estrategias políticas se sirve de herramientas e instrumentos políticos que las direccionen. En el caso peruano, el terruqueo ha servido y sirve de instrumento de las nuevas derechas para retroalimentar la narrativa de la memoria de salvación, aquella que ha creado un imaginario social en el cual, Alberto Fujimori, las FFAA y la PNP tienen impunidad y aceptación de sus actos por una parte de la ciudadanía peruana, defendiendo su protagonismo en la eliminación del terrorismo y la recuperación de la democracia, sosteniendo así la justificación de los asesinatos y demás crímenes de lesa humanidad por el supuesto beneficio mayor de la salvación del país. No es curioso entonces, como advirtió el politólogo David Sulmont (2021) que no se cuente con un marco legal para hacer frente a las protestas violentas y potenciales de los grupos extremistas con vínculos con las derechas conservadoras y colectivos militares, como La Resistencia, la Legión Patriotas del Perú (colectivos que han protagonizado actos violentos y están a favor de la vacancia presidencial), entre otros, para sancionar discursos de odio o apología a la violencia. El país tiene leyes de apología y contra terrorismo, pero no algo equivalente para la violencia estatal (Cabral y Salazar, 2021).

Según la historiadora Cecilia Méndez (2021), el término terrorismo en el Perú, entra como el terror de estado al lenguaje político moderno. Antes de la Ley de Seguridad Interna de la República de Odría de 1949, se llamó terror de Estado al que infundían los caudillos, los gobiernos tiránicos, los gamonales, como ocurrió en 1867, una vez que tres congresistas y hacendados de Puno elaboraron un proyecto de ley que buscaba reprimir a *sangre y fuego* las manifestaciones campesinas de aquel entonces, siendo llamada “la ley del terror”.

Otro hecho histórico a tomar en cuenta y que es un tabú para el APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), es el que pone al mismo como protagonista de actos terroristas a comienzos del siglo XX en el país, siendo sus militantes denominados apristas, los responsables del asesinato de un presidente en ejercicio, Luis Sánchez Cerro. El APRA jugaba un papel de doble filo: mientras participaba en las elecciones y respetaba

los mecanismos democráticos de la política, defendía, en paralelo, la táctica insurreccional de la violencia.

Sin embargo, no es hasta la segunda mitad del siglo XX que se hace uso del terrorismo para referirse a atentados y violencia insurgente.

Siguiendo el trabajo de algunos investigadores peruanos que han abordado el tema, se destaca a Flores-Galindo (1994), quien en *Buscando un inca, identidad y utopía en los Andes*, reflexiona sobre la identidad peruana y los imaginarios en torno a lo andino. En dicho libro, sostiene que, durante el CAI, el lenguaje fue transformándose al mismo tiempo que las torturas y asesinatos contra las poblaciones andinas. Así, el término *senderista* fue sustituido por *terrorista*. Esta palabra, con el tiempo, fue sinónimo de ayacuchano (proveniente de Ayacucho, región de la sierra central peruana y una de las más afectadas por el CAI), que a su vez equivalía a cualquiera que fuese *indio* o mestizo, anduviera “mal vestido”, usara deficientemente el castellano o tuviera procedencia serrana. “Decirse ayacuchano era admitirse incurso en la ley antiterrorista.”

Por otro lado, Carlos Aguirre (2011) analiza la mutación de la palabra terrorista a “terrucos” en el contexto del conflicto armado interno y su utilización posterior como un insulto dirigido a una diversidad de actores, desde defensores de los derechos humanos, familiares de detenidos, otras víctimas de la violencia política y personas de origen indígena en general.

Textos más recientes como el de Álvarez Chávez (2021), analiza los imaginarios sociales presentes en los discursos presentes durante la segunda vuelta electoral entre Castillo y Fujimori, identificando una utilización del “fantasma del comunismo”, asimilado automáticamente al terrorista, al indígena serrano opuesto al desarrollo, así como a la amenaza de “venezuelanización” que la victoria de Castillo representaría. La arremetida contra Castillo y su acusación de terrorista por parte del partido fujimorista y las derechas más reaccionarias, hacen plantear a Álvarez Chávez la posible emergencia de un fenómeno que denomina “neo-fujimorismo” o “nuevo fascismo a la peruana”, una parte de la configuración de las nuevas derechas en el país.

Asimismo, Bedoya-Forno et al. (2021) exploran el uso del terruqueo por parte de fujimoristas contra Pedro Castillo. El terruqueo es definido como una construcción imaginaria empleada para desacreditar a un grupo o a un individuo, convirtiéndolo en un blanco claramente identificable. Representadas de manera malintencionada como



terroristas, estas personas se convierten en enemigos, o son presentadas como tales en los discursos políticos, militares y mediáticos de la hegemonía política.

Finalmente, Pierina Pighi-Bel (2021), reflexiona brevemente sobre cómo se ha utilizado el terruqueo en la campaña entre Castillo y Fujimori. Además de referir al uso del término en la década de 1990, cuando era empleada mayoritariamente para referirse a los opositores al fujimorismo. A partir de los 2000, se ha utilizado para desacreditar a quienes apoyan las condenas por violaciones a los derechos humanos del expresidente, incluso se ha utilizado el término para referir a quienes critican al modelo económico neoliberal, tal y como ha mencionado el politólogo Daniel Encinas (2021), sosteniendo que cierta derecha mayoritaria peruana, creó una asociación entre “terrorista” y las críticas al modelo económico implantado en los 90s. Dicha asociación se ha debido en parte al miedo y en otra a una estrategia de manipulación del legado de la violencia política, recurriendo al terruqueo cada vez que el país se sumerge en debates políticos relevantes e intensos o en momentos en los que la ciudadanía se polariza. Así, se ha llegado a terruquear hasta partidos de centro derecha, evidenciando que cualquier persona o colectivo que quiera pensar en el bien común, con ideas más progresistas, que ejerza su derecho a la protesta y a la crítica, es asociada por las nuevas derechas neoconservadoras con el terrorismo, por defecto (Mendoza, 2022). Sin embargo, no solo se terruquea a personas, se terruquean canciones, monumentos, organizaciones sociales, marchas y manifestaciones, museos, exposiciones de arte, obras de teatro, intervenciones públicas, traduciéndose en acciones violentas contra dichos elementos, espacios y expresiones, como lo fueron los diversos ataques por parte de fujimoristas que sufrió el memorial El ojo que llora, memorial de iniciativa privada para honrar a las víctimas de la violencia del CAI, incluyendo los nombres de civiles, policías y militares registrados en el Registro Único de Víctimas (RUV), precisado por la expresidenta del Consejo de Reparaciones, Sofía Macher, tras el último ataque por bancadas de derecha del Congreso de la República (Palacios, 2022), o el terruqueo al Lugar de la Memoria (LUM), espacio público de conmemoración pedagógico y cultural que aborda los años de violencia entre los años 80-2000, o, finalmente, el terruqueo al Informe Final de la CVR, documento que resume y explica detalladamente los hallazgos de la CVR en la investigación realizada sobre los años del CAI, una vez finalizado este. El Informe Final es de particular interés en el presente ensayo, desarrollándose a profundidad más adelante.

## **La democracia disputada: entre la memoria de salvación y la memoria para reconciliación**

Tras finalizado el CAI, distintos actores políticos se reactivaron, asentándose una narrativa que enfatizó el papel de las FFAA en el proceso de pacificación del país frente a la amenaza permanente de la subversión y el desgobierno. A esta narrativa se le conoce como “memoria de salvación” (Degregori, 2013), puesto que centra a Alberto Fujimori, respaldado por las FFAA, como el único responsable de la derrota estratégica contra Sendero Luminoso y la recuperación de la democracia. Así, el ex gobernante se convierte en un “salvador” que se enfrenta al terror, el odio y la masacre entre peruanos provocada por un personaje “sanguinario” como Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso. Esa memoria de salvación sitúa al ex presidente Alberto Fujimori y su legado como un aporte relevante a la lucha contra la violencia, trayendo como una grave consecuencia la legitimación del autoritarismo en la conducción del Estado (Barrantes y Peña, 2006), al justificar violaciones a los derechos humanos como parte del costo de la guerra (Jave, 2020). La memoria de salvación puede entenderse a partir de lo que Ricoeur (2000) llamó memoria manipulada, es decir, aquella que es motivo de una acción concertada por quienes tienen el poder y que está al servicio de la reivindicación de una identidad amenazada. Según Ricoeur, detrás de la memoria manipulada se encuentra una ideología que cumple la función de cuidar la identidad y justificar un sistema de orden o de poder, produciendo un relato que ofrece recursos de manipulación de memoria en un plano en que ésta queda equipada por una historia oficial, autorizada, celebrada y aprendida.

Por otro lado, el trabajo que la CVR presentó, fue en abierto antagonismo con la versión que se había construido durante el régimen autocrático de Alberto Fujimori. Dicho trabajo sostiene una memoria para la reconciliación, en intención de abrirse a valores democráticos y a la realización de un orden constitucional justo y sin exclusiones.

Tras el colapso del gobierno de Alberto Fujimori, el gobierno de transición a la democracia creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) para analizar los hechos ocurridos durante el CAI, sus causas, consecuencias y las posibilidades que la situación ofrecía para la reconstrucción de la democracia sobre la base de una serie de recomendaciones que abarcaron desde reformas institucionales hasta reparaciones a las víctimas, pasando por la condena penal a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. Como resultado de su trabajo, la CVR produjo un Informe Final de

nueve tomos, en el que, entre otras cosas, se ofrecía una versión distinta de la que el régimen anterior había elevado al rango de narrativa oficial. Dicha versión no era solamente una refutación de la historia oficial vindicada por el gobierno de Fujimori. En primer lugar, se trata de una versión más comprensiva de las distintas aristas de la violencia y de las voces de las personas no atendidas hasta entonces. En segundo lugar, ella constituye una interpelación bastante severa a los tres gobiernos bajo los cuales se desarrolló el conflicto y se violaron impunemente derechos humanos (Barrantes y Peña, 2006).

En ambos casos, ambas memorias se tratan de campos organizados alrededor de ciertas verdades emblemáticas, pero diversas en su configuración, creando diferentes sentidos comunes respecto a la historia.

En el campo de disputa de ambas memorias, se está realizando un trabajo de la memoria, en donde el pasado se encuentra sujeto a reinterpretaciones ancladas en la intencionalidad y en las expectativas hacia el futuro. Ese sentido del pasado es un sentido activo, dado por agentes sociales que se ubican en escenarios de confrontación y lucha frente a otras interpretaciones, otros sentidos comunes. Así, las posiciones sociales en disputa narran y construyen sentidos del pasado enfocando de forma distinta los hechos ocurridos. En principio, las narrativas y las memorias versan sobre múltiples aspectos de una experiencia social. El caso específico de la comprensión de un proceso de violencia — llámese guerra interna o conflicto armado interno— está compuesto de múltiples dimensiones: orígenes, responsabilidades, hechos, actores, ideas de cómo finalizó, efectos sobre el cuerpo social y muchas más. Las partes en conflicto seleccionan ciertas dimensiones, en todo caso hacen girar sus narrativas y memorias sobre ciertos ejes que pueden tener mayor importancia estratégica. Se produce así una disputa simbólica en la que las partes ponen de relieve algunos aspectos mientras que otros son descuidados o de hecho suprimidos. Se trata de una disputa que da forma al sentido del pasado según los intereses y recursos con que se cuenta. (Jelin, 2002).

## **Un giro a la derecha: del terruqueo del Informe Final de la CVR a su instrumentalización política**

No solo se terruquean personas, colectivos y organizaciones de la oposición, también se terruquean lugares, monumentos e instrumentos de la memoria. En ese sentido, el Informe Final de la CVR ha sido terruqueado desde su publicación hasta que le es conveniente a las derechas utilizarlo para sus fines políticos.

Durante la segunda vuelta, en redes sociales como Twitter y en el espacio público, se ha visto a personas “mandando a leer” el Informe Final de la CVR a personas votantes de Pedro Castillo o personas que simplemente se mostraran críticas ante Keiko Fujimori. La ideología política del partido Perú Libre (autodenominados marxistas-leninistas-mariateguistas), que además de haber puesto a un presidente, puso 37 congresistas a nivel nacional, fueron un activo para el terruqueo, además de supuestos vínculos con el MOVAREDEF (Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales, que buscaban la amnistía de Abimael Guzmán, ex cabeza del PCP-SL y otros senderistas condenados) por parte de figuras políticas del partido, entre ellos, el mismo presidente. Sin embargo, esta controversia no es desarrollada en el presente ensayo, pues se concentra en analizar los mecanismos de las derechas para un manejo y continuidad de su hegemonía.

Así, las nuevas derechas en Perú, en la coyuntura actual, han hecho uso de ciertas partes del Informe Final de la CVR para darle fuerza a los argumentos en contra del gobierno de turno, citando solamente los datos de la violencia documentada ejercida por el PCP-SL y el MRTA, sin precisar que en las mismas páginas, la CVR documentó las violencias ejercidas por las FFAA y la PNP durante los 80 y 2000, teniendo en cuenta que el gobierno de Alberto Fujimori, a quien se le condena por haber ordenado asesinatos, desapariciones y secuestros arbitrarios de civiles, entre ellos, niñas y niños, como el caso de Barrios Altos en Lima, fue responsable de otro tipo de terrorismo que, mediante la maquinaria dialéctica del gobierno de ese entonces y las posteriores fuerzas políticas de la derecha neoconservadora, es socialmente aceptada: el terrorismo de Estado, defendido y vindicado gracias a la narrativa de la memoria de salvación, inserta ya en el imaginario colectivo de una parte de la sociedad peruana; es decir, parte del sentido común.

Gracias a esto es que ha habido algunos intentos de materialización de políticas de memoria (denominémoslas políticas de memorias de salvación) desde las nuevas derechas en el gobierno, en la actual época posconflicto, a fin de “esclarecer los hechos”

y “limpiar la dignidad y memoria de las FFAA, la PNP y Alberto Fujimori” en reacción a los hechos vertidos en el Informe Final de la CVR. Se documentan intentos mediante la presentación de proyectos de ley por parte de congresistas de Fuerza Popular desde el año 2011 para, por ejemplo, declarar de necesidad pública y de interés nacional la incorporación de contenidos curriculares referidos al terrorismo en el Perú, o proyectos de ley que incluyen el valor histórico de la lucha contra el terrorismo y el logro de la pacificación nacional a cargo de las fuerzas armadas, la policía nacional del Perú, comités de autodefensa y sociedad civil organizada en el currículo nacional y la agenda bicentenario. Sin embargo, son de particular interés los últimos intentos de las nuevas derechas en este nuevo gobierno para la materialización de la memoria de salvación en las políticas públicas del país, ya que, a diferencia de sus antecesores, han hecho uso de manera contradictoria, de información del mismo informe por el cual se han visto en la necesidad de reaccionar desde su publicación. Este es el caso del proyecto de ley que declara de interés nacional y necesidad pública la enseñanza obligatoria del curso de historia del terrorismo en el Perú en las instituciones educativas del país, presentado por Jeny López Morales, actual congresista por Fuerza Popular, en septiembre de 2021. En la exposición de motivos, específicamente en los fundamentos, se cita el Informe Final de la CVR:

*“La Comisión de la Verdad y Reconciliación fue creada en el 2001 para elaborar un informe sobre la época del terrorismo en nuestro país y ella señaló en su documento final que el costo de vidas humanas fue de aproximadamente 69,280 personas, entre muertos y desaparecidos, y la destrucción de US \$20,000 millones en infraestructura privada y pública, lo cual no puede ser olvidada o dejada de lado o ignorarla en nuestra historia. Permitirlo, como lo estamos haciendo, es faltarnos el respeto.”*

Asimismo, indican

*“Si bien es cierto que no es grato recordar las atrocidades cometidas por las organizaciones terroristas de Sendero Luminoso (SL) y el autodenominado Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), en la época de violencia, sin embargo, es absolutamente necesario hacerlo ante el alarmante desconocimiento que tienen muchos jóvenes sobre el accionar de esos grupos sanguinarios que enlutó a todo el país.”*

En sus antecedentes, prosigue:

*“La organización terrorista (SL) y el MRTA fueron las organizaciones que desangraron con hechos violentos en el periodo entre 1980 y el 2000. El objetivo de SL como el MRTA era la posesión del poder. La primera, iniciando el llamado **“guerra popular”** contra el Estado peruano, con el fin de destruir sus instituciones e instaurar un régimen totalitario (Comisión de la Verdad y Reconciliación “CVR”, 2004, pag. 16), y el MRTA también tenía como finalidad llegar al poder mediante armas a través del reinicio de la **“violencia revolucionaria”** (Comisión de Entrega de la CVR, 2004, p. 197).”*

Además de mencionar el Lugar de la Memoria – LUM, espacio que ha sido terruqueado sistemáticamente:

*“En el año 2015 fue inaugurado el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) a cargo del Ministerio de Cultura. “Su muestra permanente está consagrada a la narración de los hechos de violencia transcurridos entre los años 1980 y 2000, con el objetivo de mostrar lo ocurrido y conmemorar a las víctimas. El LUM se define como un espacio pedagógico, cultural y de encuentro ciudadano donde recordar es un ejercicio de aprendizaje que permite destacar la importancia de los derechos humanos”, sin embargo, no es suficiente para llevar educación a la totalidad de jóvenes de nuestro país.”*

Respecto a las acciones a tomarse en cuenta, es de particular atención los siguientes dos párrafos respecto al Informe de la CVR y las FFAA y PNP:

*“(…) esta obligatoriedad de la enseñanza de este rubro en nuestra educación deberá promover una cultura, respeto, tolerancia y discernimiento de ideas, de políticas y de buenas prácticas cívicas que permita conocer en su real dimensión los estragos del daño sufrido, las causas de la misma, los índices de pobreza y de desigualdad en la población y acciones para evitar repetir la historia, teniendo en cuenta como base lo señalado en el documento oficial de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.” (López Morales, 2021).*

*“Nuestro país requiere de paz, de unión..., de conocimiento real de nuestras debilidades, de nuestras amenazas...; y sólo teniendo el entendimiento de lo acontecido en nuestra historia reciente, nuestros jóvenes valorarán el sacrificio*

*de nuestras Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de las rondas campesinas, de nuestras autoridades y del pueblo en general que luchó contra esos ataques arteros, viles y cobardes, y que no fue subversión, ni conflicto armado como quieren algunos interesados darle ese perfil y tergiversar nuestro pasado de lo que fue realmente terrorismo salvaje y cruel, motivo por el cual, los textos escolares deben ser claros y precisos.”*

Como se puede constatar en el primer párrafo, no sólo se ha puesto énfasis en el número de víctimas a manos específicas de SL, sino también, en el costo económico: “...*el costo de vidas humanas fue de aproximadamente 69,280 personas, entre muertos y desaparecidos, y la destrucción de US \$20,000 millones en infraestructura privada y pública, lo cual no puede ser olvidada o dejada de lado o ignorarla en nuestra historia. Permitirlo, como lo estamos haciendo, es faltarnos el respeto*”, dejando entrever la importancia de la defensa del modelo económico mediante su mención equiparable a las vidas humanas en una misma sentencia.

Líneas más abajo, en donde se citan retazos de la CVR para la sustentación de los antecedentes del proyecto de ley y sus acciones, se evidencia la selección de las partes “correctas” que les son útiles del Informe Final de la CVR, desechando aquellas que los interpelan, resaltando la pacificación y el heroísmo de las FFAA y las autoridades del poder ejecutivo de entonces, con Fujimori en la cabeza. Así, la memoria fujimorista, de salvación o memoria conservadora, busca encerrar todo lo ocurrido en las décadas de 1980 y 1990 bajo el rótulo de “época del terrorismo”, lo que pone al margen la responsabilidad de la clase política de entonces frente a la crisis y en particular, frente a sus crímenes (Agüero et, al. 2012), como se constata en el siguiente retazo: “...*nuestros jóvenes valorarán el sacrificio de nuestras Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de las rondas campesinas, de nuestras autoridades y del pueblo en general que luchó contra esos ataques arteros, viles y cobardes...*”.

La instrumentalización del Informe Final de la CVR en el Estado por parte de las bancadas de las nuevas derechas, es un hecho, evidenciándose en las contradicciones entre la mención del Informe como documento base de las directrices educativas para la implementación del proyecto de ley “...*esta obligatoriedad de la enseñanza de este rubro en nuestra educación deberá promover una cultura, respeto, tolerancia y discernimiento de ideas, de políticas y de buenas prácticas cívicas que permita conocer en su real dimensión los estragos del daño sufrido, las causas de la misma, los índices de pobreza*

*y de desigualdad en la población y acciones para evitar repetir la historia, teniendo en cuenta como base lo señalado en el documento oficial de la Comisión de la Verdad y Reconciliación” y su posterior negación de una de las conclusiones que ha permitido a la sociedad peruana, comprender la magnitud y complejidad de la violencia en el país, al denominar dicho periodo como conflicto armado interno (CAI): “...y que no fue subversión, ni conflicto armado como quieren algunos interesados darle ese perfil y tergiversar nuestro pasado de lo que fue realmente terrorismo salvaje y cruel, motivo por el cual, los textos escolares deben ser claros y precisos.”*

## **Conclusiones**

El giro a la derecha en la instrumentalización del Informe Final de la CVR para fines políticos, da cuenta de la consciencia de las nuevas derechas sobre la necesidad de construcción hegemónica mediante la configuración de estrategias complejas a fin de disputar distintos espacios de poder en la sociedad, siendo el Estado la clave para promoverlas e implementarlas.

La implementación de estrategias políticas se sirve de herramientas e instrumentos políticos que las direccionen. En el caso peruano, el terruqueo ha servido y sirve de instrumento de las nuevas derechas para retroalimentar la narrativa de la memoria de salvación, aquella que ha creado un imaginario social en el cual, Alberto Fujimori, las FFAA y la PNP tienen impunidad y aceptación de sus actos por una parte de la ciudadanía peruana, defendiendo su protagonismo en la eliminación del terrorismo y la recuperación de la democracia, sosteniendo así la justificación de los asesinatos y demás crímenes de lesa humanidad por el supuesto beneficio mayor de la salvación del país. Es así que durante estas últimas décadas, se han promovido leyes y políticas que ahora sirven para las fórmulas legales de proyectos de ley como el que se acaba de analizar, tales como la Política Nacional Multisectorial de Lucha Contra el Terrorismo 2019-2023, que, citando a la CVR para dar cuenta de la violencia de SL y el MRTA, no menciona la responsabilidad de las FFAA, la PNP y el gobierno de turno en el terrorismo de Estado desatado durante el CAI.

Que el proyecto de ley analizado en el presente ensayo sea de particular interés se debe a que existe una insistencia intermitente por la bancada de Fuerza Popular en los últimos



años de modificar la currícula escolar para la tergiversación de la historia reciente, en afán de la promoción de una posverdad a favor de las nuevas derechas y su narrativa democrática del modelo económico, el sentido común que lo sostiene y se retroalimenta en ella. La esfera educativa es un punto estratégico para la generación de memorias y por ende, sentidos comunes que puedan servir de aliciente a la hegemonía política del país, sin embargo, por motivos de extensión, se dejan las siguientes preguntas para su posterior desarrollo: ¿qué acciones se están proponiendo desde la oposición para contrarrestar la alimentación de los sentidos comunes construidos en base a las narrativas de posverdad sobre el CAI?, ¿cómo están trabajando los emprendedores de la memoria de reconciliación para disputar la esfera de la educación respecto al CAI?, ¿de qué manera están desplegando las nuevas derechas en sus bases sociales los discursos sobre el terrorismo mediante la utilización actual del Informe Final de la CVR, hasta ahora terruqueado, para sustentar sus argumentos?

## Bibliografía

Aguirre, C. (2011). Terruco de m...Insulto y estigma en la guerra sucia peruana. *Histórica*, 35(1), 103-139.

<https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/historica/article/view/2813>

Agüero, JC., Portugal, T. & Muñoz-Nájar, S. (2012). Memoria y violencia política. *Revista Quehacer*, 85, 61-69.

<https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA289215199&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=02509806&p=AONE&sw=w&userGroupName=anon%7Ecc0bace>

Álvarez-Chávez, R. (2021). El Perú de cara al Bicentenario: los imaginarios sociales en la resistencia colonial frente a la decisión popular. *Investigaciones sociales* (45), 327-344.

<https://doi.org/10.15381/is.n45.21393>

Bedoya-Forno, R., Delacroix, D., Robin-Azevedo, V., & Romero-Barrios, T. (2021). La violencia que no cesa. Huellas y persistencias del conflicto armado en el Perú contemporáneo. Punto Cardinal Editores.

Cabral, E. & Salazar, E. (Diciembre 1, 2021). Militares en retiro con discursos extremistas se vinculan a políticos para apoyar la vacancia. <https://ojo-publico.com/3207/militares-en-retiro-discursos-extremistas-y-apoyo-politico>

Degregori, C. (2003) Jamás tan cerca arremetió lo lejos. Memoria y violencia política en el Perú. IEP y Social Science Research Council.

Flores-Galindo, A. (1994). Buscando un inca. Identidad y utopía en los Andes. Editorial Horizonte.

Giordano, V. (2014). ¿Qué hay de nuevo en las «nuevas derechas»? Nueva Sociedad. [https://static.nuso.org/media/articles/downloads/4068\\_1.pdf](https://static.nuso.org/media/articles/downloads/4068_1.pdf)

Hinkelammert, F. (1988). Democracia y nueva derecha en América Latina. Nueva Sociedad, 98, 104-115. [https://static.nuso.org/media/articles/downloads/1703\\_1.pdf](https://static.nuso.org/media/articles/downloads/1703_1.pdf)

Jave, I. (2020). Perú: Tensiones y avances en la construcción de la memoria. IDEHPUCP. [https://idehpucp.pucp.edu.pe/idehpucp\\_medios/peru-tensiones-y-avances-en-la-construccion-de-la-memoria/](https://idehpucp.pucp.edu.pe/idehpucp_medios/peru-tensiones-y-avances-en-la-construccion-de-la-memoria/)

Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Siglo XXI.

Lauer, M. (1988). Adiós conservadurismo; bienvenido liberalismo. La nueva derecha en el Perú. <https://nuso.org/articulo/adios-conservadurismo-bienvenido-liberalismo-la-nueva-derecha-en-el-peru/>

López Morales, J. (Septiembre 24, 2021). Proyecto de Ley 291/2021-CR. Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la enseñanza obligatoria del curso de historia del terrorismo en el Perú en las instituciones educativas del país. <https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTMwNA==/pdf/PL-00291>

Méndez, C. (2021). The Paths of Terrorism in Peru. Nineteenth to Twenty First Centuries en The Cambridge History of Terrorism. Cambridge University Press.

Mendoza, M. (2022). La utilización política del terrorismo en la campaña presidencial peruana de 2021. <https://doi.org/10.17163/uni.n36.2022.10>

Mitrovic, M. (2021). At the fabric of history: Peru's political struggle under (and against) the pandemic. *Dialect Anthropol* 45, 431–446. <https://doi.org/10.1007/s10624-021-09634-5>

Palacios, P. (2022). Nombres en El Ojo que Llora son del Registro Único de Víctimas. La República. <https://larepublica.pe/politica/2022/01/28/ministerio-de-cultura-nombres-en-el-ojo-que-llora-son-del-registro-unico-de-victimas-gisela-ortiz-patrimonio-cultural-de-la-nacion/>

Pighi-Bel, P. (31 de mayo de 2021). Debate presidencial en Perú: qué es el “terruqueo” y cómo influye en la campaña entre Fujimori y Castillo. BBC News Mundo. <https://bbc.in/36e373e>

Ricoeur, P. (2000). La memoria, la historia, el olvido. 109-116. Fondo de Cultura Económica.

Van Dijk, T. A. (1999). El análisis crítico del discurso. *Anthropos* 186, 23-36. <http://www.discursos.org/oldarticles/El%20an%20alisis%20cr%20tico%20del%20discurso.pdf>